Bogotá 18 de Junio de 2018

Señor

**JUEZ 31 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**

Carrera 57 N° 43-91 piso 1 correspondencia

E. S. D.

Referencia: Reparación Directa

Demandante: Jorge Eliecer Barliza y Otros

Demandado: Distrito Capital de Bogotá y Otros

Radicado: 11001333603120160023700

**Asunto: Contestación de la Demanda**

**Viviana Carolina Cruz Bermúdez**, mayor de edad, identificada con Cédula de ciudadanía N° 1.014’217.313 de Bogotá, domiciliada y vecina de esta ciudad, abogada en ejercicio, con tarjeta profesional N° 252.434 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderada General de **La Equidad Seguros Generales O. C**., según escritura pública N° 983 de la Notaria 10 del Circulo de Bogotá del 10 de agosto de 2017, documentación que del se adjunta, me permito presentar contestación de demanda directa, dentro del término legal establecido en los siguientes términos:

**A LOS HECHOS DE LA DEMANDA:**

**AL PRIMERO:** Es cierto este hecho se puede constatar con la documentación allegada al proceso, especialmente en informe policial de accidente de tránsito allegado con el escrito de demanda.

**AL SEGUNDO:** Es cierto este hecho se puede constatar con la documentación allegada al proceso, especialmente en informe policial de accidente de tránsito allegado con el escrito de demanda.

**AL TERCERO:** Es cierto, sin embargo cabe resaltar que la póliza de responsabilidad civil extracontractual únicamente opera si se cumplen las condiciones tanto generales como particulares suscritas.

**AL CUARTO:** No le consta a mi representada, son hechos en los que esta no tuvo participación por exceder su órbita comercial, me atengo a lo que sea demostrado en el desarrollo del proceso.

**AL QUINTO:** En este hecho, la parte actora realiza varias afirmaciones de las cuales me manifiesto así:

1. Respecto a la causal establecida en el informe policial de accidente de tránsito es cierto de acuerdo a lo plasmado en el informe policial de accidente de tránsito, sin embargo cabe resaltar que solo se trata de una hipótesis ya que los agentes de tránsito no están de manera presencial al momento de la ocurrencia de los hechos motivo por el cual esta no debe tenerse como prueba.

2. Respecto a la existencia de falta de atención y cuidado, no le consta a mi representada, ya que no existe prueba que acredite lo que manifiesta la parte actora, me atengo a lo que sea demostrado en el desarrollo del proceso.

**AL SEXTO:** No le consta a mi representada por ser hechos que exceden su órbita comercial, me atengo a lo que sea demostrado en el desarrollo del proceso.

**AL SÉPTIMO:** Es cierto, lo manifestado en este hecho se puede corroborar con la documentación allegada al proceso, especialmente en historia clínica, en la que se indican las lesiones sufridas y los antecedentes médicos que pudieron ingerir en las mismas, por ser una persona con obesidad y con patología “obsesivo compulsivo” con tratamiento farmacológico.

**AL OCTAVO:** Es una transcripción parcial, me atengo a lo que sea demostrado en el desarrollo del proceso.

**AL NOVENO:** Es cierto, este hecho se corrobora con el informe médico legal allegado con el escrito de demanda.

**AL DÉCIMO:** No le consta a mi representada, son hechos que carecen de prueba, así mismo exceden la órbita comercial de mi representada, me atengo a lo que sea demostrado en el desarrollo del proceso.

**AL DÉCIMO PRIMERO:** Es cierto, este hecho se puede constatar con la documentación allegada al proceso, sin embargo cabe resaltar que con anterioridad ya se había convocado a diligencia de conciliación prejudicial.

**AL DÉCIMO SEGUNDO:** Es cierto.

**AL DÉCIMO TERCERO:** Es cierto, este hecho se puede constatar con la documentación allegada al proceso.

**EN CUANTO A LAS PRETENSIONES:**

Me opongo a que prosperen todas y cada una de las pretensiones planteadas en la demanda así:

PRIMERA: Me opongo a esta pretensión por carecer de prueba que argumente la existencia de responsabilidad incoada.

SEGUNDA: Me opongo al reconocimiento de los presuntos perjuicios indicados en primera medida por carecer de prueba, no se acredita con la declaración de renta los ingresos manifestados, así mismo es claro que las peticiones por perjuicios inmateriales exceden los topes máximos establecidos por el Concejo de Estado.

TERCERO: Me opongo a dicha pretensión por carecer de sustento jurídico.

CUARTO: Me opongo a la condena en costas y agencias en derecho por no estar demostradas.

Finalmente, es necesario indicar que no es procedente ninguna manifestación respecto de mi representada con indicación de solidaridad, ante La Equidad Seguros Generales O.C., toda vez que la responsabilidad del hecho no es atribuible a mi representada, así mismo es claro que no es solidariamente responsable, ya que su intervención en el proceso obedece a un contrato de seguro suscrito, por lo tanto en caso de una eventual sentencia desfavorable, y cualquier condena que se le imponga tendrá que estar dentro de los precisos lineamientos establecidos por el contrato de seguro suscrito, dentro de las condiciones particulares y generales.

Puesto que la demanda carece de fundamento solicito se condene en costas a la parte demandante (art. 365 y 366 CGP).

**EXCEPCIONES:**

Sin perjuicio de que el señor juez declare de oficio aquellas excepciones que aparezcan probadas durante el proceso, me permito oponerme a la prosperidad de las pretensiones con las siguientes razones de hecho y de derecho:

1. **RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES PELIGROSAS:**

Como es de común conocimiento, cuando se presenta un daño a un tercero en el ejercicio de la conducción de vehículos automotores, la responsabilidad se configura a la luz de las actividades peligrosas.

En efecto, ha dicho la jurisprudencia en Sentencia de la Corte Suprema de Justicia - -Sala de Casación Civil y Agraria, MP. William Namén Vargas, del 4 de agosto de 2009 “explicó la sala, *el juzgador valorará la conducta de las partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada también una culpa o dolo del sujeto, establecerá su relevancia no en razón al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal”.* Es decir que el Juez debe analizar la conducta de todos los intervinientes víctimas o no para así verificar si su comportamiento tiene incidencia en la ocurrencia del mismo.

Así mismo la Corte sostuvo que *“No es que las actividades peligrosas encarnen de suyo la “culpa”. El ejercicio de una actividad de esta naturaleza podrá desplegarse, aún con todo el cuidado o diligencia exigible y también sin ésta.*

*Empero, no escapa a la Corte la posibilidad de una conducta culposa o dolosa del autor, de la víctima o de uno y otro en el ejercicio de una actividad peligrosa; así en los daños generados con la colisión de vehículos, uno de los conductores podrá infringir las normas de tránsito, omitir las revisiones obligatorias, desplazarse a alta velocidad, en zona prohibida, atropellar deliberadamente un peatón o al otro automotor, etc., y, el otro, incurrir en similares comportamientos.*

*En tales hipótesis, esas conductas apreciadas en su exacto sentido, encarnan la exposición o elevación de los riesgos o peligros del ejercicio de la actividad peligrosa, los deberes de precaución o los inherentes a la posición de garante, según la perspectiva que se acoja, más no desplazan la responsabilidad al régimen general de la culpa, desde que ésta ninguna relevancia ostenta para estructurarla ni excluirla.*

*La conducta, sea o no culposa o dolosa, se apreciará objetivamente en el contexto del ejercicio de la actividad peligrosa y la secuencia causal del daño según el marco fáctico de circunstancias y los elementos probatorios, para determinar si es causa única o concurrente y, por ende, excluir o atenuar el deber indemnizatorio.*

*No es que se valore la culpa o el dolo en cuanto tales, ni en consideración al factor subjetivo, sino la conducta en si misma dentro del contexto del ejercicio de una actividad peligrosa según el marco de circunstancias fácticas y los elementos probatorios*.

En conclusión, el régimen aplicable en tratándose de actividades peligrosas, no enmarca siempre una acción maliciosa y voluntaria, por el contrario pueden ocurrir fruto de coincidencias o algún tipo de contingencia que suelen pasar con frecuencia, por tanto no es menester imputar responsabilidad por el simple hecho de ejercer una actividad peligrosa debe hacerse un análisis exhaustivo de los elementos que pueden tener algún tipo de inferencia en la ocurrencia, así mismo sostiene la Honorable Corte Suprema de Justicia que “La presunción de culpa carece de fundamento lógico y normativo: La supuesta presunción de culpa por el mero ejercicio de una actividad peligrosa, carece de todo fundamento lógico y normativo. **Legal,** porque ninguna parte del artículo 2356 del Código Civil, siquiera menciona presunción alguna. **Lógico,** porque cualquier actividad humana, y en especial, la peligrosa, puede desplegarse con absoluta diligencia o cuidado, o sea, sin culpa y también incurriéndose en ésta. De suyo**, tal presunción contradice elementales pautas de experiencia y sentido común, al no ajustarse a la razón presumir una culpa con el simple ejercicio de una actividad que de ordinario como impone la razón se desarrolla con diligencia, prudencia y cuidado”**

Así mismo La presunción de culpa no es útil ni normativa ni probatoriamente: La presunción de culpa, ninguna utilidad normativa o probatoria comporta al damnificado, tampoco es regla de equidad y menos de justicia, pues su único efecto jurídico es eximir de la probanza de un supuesto fáctico por completo ajeno al precepto, no menester para estructurar la responsabilidad, ni cuya probanza contraria es admisible, cuando toda presunción, salvo la iuris et de iuris que exige texto legal expreso, es susceptible de infirmar con la demostración de la diligencia y cuidado. Por tanto **el juzgador con sujeción a la libre convicción y la sana crítica valorará los elementos probatorios para determinar cuál de las actividades peligrosas concurrentes es la causa del daño y la incidencia de la conducta de la víctima en la secuencia causal, asignando, en todo o en parte, a uno o a ambos sujetos la responsabilidad según su participación, a cuyo efecto, imputado a la actividad de una sola parte, ésta es responsable por completo de su reparación y si lo fuere a ambas, cada una lo será en la medida de su contribución**. En otros términos, cuando la actividad peligrosa del agente es causa exclusiva del daño, éste será responsable en su integridad; contrario sensu, siéndolo la ejercida por la víctima, ninguna responsabilidad tendrá; y, si aconteciere por ambas actividades, la del agente y la de la víctima, como concausa, según su participación o contribución en la secuencia causal del daño, se establecerá el grado de responsabilidad que le asiste y habrá lugar a la dosificación o reducción del quantum indemnizatorio”

En consecuencia y de acuerdo a lo anterior, es claro que la parte actora deberá demostrar que la conducta de la víctima no infirió en la ocurrencia de los hechos, así mismo demostrar que el señor Jorge Barliza, se desplazaba acatando en su totalidad las normas de tránsito, y que su actuar no incurrió o ayudo en algún grado a la ocurrencia del accidente.

1. **CONCURRENCIA DE CULPAS:**

Es importante resaltar que en el accidente de tránsito las partes en alguna medida tuvieron inferencia en la producción del hecho, al respecto el Consejo de Estado Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de julio de 2014, Exp. 76001-23-31-000-1999-00155-01(30590), M.S. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, se determina la concurrencia de culpas como

 “*la omisión de una obligación de la Administración, consistente en mantener en buen estado de funcionamiento, señalización e iluminación sus vías, sumada a la conducta imprudente y negligente de la víctima que, en mayor medida, contribuyó para causar o producir el hecho dañoso”.*

Al respecto es claro que de acuerdo a lo registrado en el informe policial de accidente de tránsito allegado se determinó que concurrieron en la ocurrencia del choque dos vehículos, el vehículo de placa DDW416, y el vehículo de placa WEQ789, así mismo no existe prueba o sentencia judicial que atribuya que los hechos fueron únicamente ocasionados por el conductor del vehículo de placa WEQ789, o que el vehículo de placa DDW416 fue eximido de responsabilidad, es decir que a la fecha se infiere que los dos vehículos con ocasión al desarrollo de una actividad peligros tuvieron algún grado de responsabilidad en el hecho.

1. **INAPLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN POR RESPONSABILIDAD EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES PELIGROSAS: COLISIÓN DE ACTIVIDADES**

En el presente caso, tal como se desprende de las pruebas arrimadas y de la narración de los hechos de la demanda, tanto el vehículo de placas placa DDW416, y el vehículo de placa DDW416, se encontraban en el ejercicio de una actividad peligrosa, consistente en la conducción de vehículo automotor.

Por lo tanto, los conductores de los vehículos involucrados en el accidente concurren al suceso dañoso ejerciendo similares actividades peligrosas, en tal supuesto, se aniquilan mutuamente las presunciones por responsabilidad, forzando al actor a demostrar la culpa de los demandados.

La doctrina ha sido clara en establecer que la colisión de actividades peligrosas se presenta cuando “[…] el daño es el resultado de la conjunción de dos culpas presuntas, es decir, que **se haya producido en el ejercicio por parte de ambos adversarios de actividades**, o provengan de cosas, de las cuales la jurisprudencia desprenda presunciones de culpa o con la intervención de varias personas sujetas a la dependencia de otras. **Por ejemplo, dos automóviles en marcha chocan**; dos menores se arrojan piedras desde la terraza de la casa de cada uno de ellos, ocasionando daños en sus respectivas residencias y en sus automóviles estacionados cerca de ellas […]”[[1]](#footnote-1)

Así las cosas, en el presente caso nos encontraríamos frente a la responsabilidad con culpa probada prevista en el artículo 2.341 del Código Civil, tal como lo ha establecido la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los fallos, cuyos apartes cito a continuación:

* Corte Suprema de Justicia Sentencia 5462 de 2000 MP José Fernando Ramírez Gómez:

“Como en este caso el accidente se produjo cuando ambas partes desarrollaban actividades de ese tipo, se eliminaba cualquier presunción de culpa, lo que a su turno implicaba que la acción no se examinara a la luz del artículo 2356 del C. Civil, sino del 2341 del íbidem, evento en el cual el demandante corría con la carga de demostrar todos los elementos integrantes de la responsabilidad civil extracontractual.”

* Corte Suprema de Justicia Sentencia 6527 de 16 de marzo de 2001. MP Silvio Fernando Trejos Bueno:

“La parte demandante debió probar la culpa de los demandados, por tratarse de una colisión entre dos vehículos bus y bicicleta que transitaban bajo la presunción de actividades peligrosas, para el caso la presunción de culpa se neutraliza y lo aplicable no sería el artículo 2356 del Código Civil sino el 2341 de culpa probada.”

* Corte Suprema de Justicia Sentencia 3001 de 31 de enero de 2005 MP Pedro Octavio Múnar Cadena:

“[…] actividad desplegada por las partes de las denominadas peligrosas, razón por la cual las presunciones sobre su culpa se neutralizan. Por ello, habrá que responsabilizar a quien se le demuestre una culpa efectiva.”

En conclusión, en el sub lite, se entiende claramente que el régimen a aplicar es el de **culpa probada** y que, por tanto, concierne a la parte actora demostrar todos los elementos necesarios para configurar la responsabilidad, para así poder predicar algún tipo de responsabilidad patrimonial de los demandados.

1. **DILIGENCIA Y CUIDADO:**

Para fundar un proceso de responsabilidad civil no basta con establecer una relación de imputación objetiva entre el resultado y el acto causal. Se requiere que el acto sea negligente o imprudente, y lo será aquél que infringe el deber de cuidado objetivamente exigible en la relación de la actividad peligrosa. Para el caso, este deber de cuidado viene determinado por reglas especiales de tránsito y circulación de vehículos automotores.

Es claro que a la fecha no existe una prueba certera que demuestre que el señor Juan Carlos Perdigón incurrió en violación de las normas de tránsito o la intencionalidad en causar daño.

1. **GRADUACIÓN DE LA CULPA POR CAUSALIDAD CONJUNTA DE LOS AGENTES GENERADORES DEL DAÑO, CON BASE EN SU GRADO DE CONTRIBUCIÓN**

Al respecto ha manifestado la honorable Corte Suprema de Justicia que “varios hechos o acciones tienen la aptitud jurídica suficiente para producir el perjuicio sobreviniente, de suerte que todos ellos hayan cooperado en su realización, entonces se estará frente a una causalidad conjunta, que comporta una imputación plural en contra de todos sus autores”**[[2]](#footnote-2)**

Dicho lo anterior se debe valorar por el despacho la incidencia que tuvieron tanto el conductor del vehículo de placa DDW416, como el conductor del vehículo de placa WEQ789, en la ocurrencia de los hechos, y conforme a las pruebas allegada, ya que la Honorable Corte indica que se debe responder únicamente por el daño causado y verificar la modulación del grado de culpabilidad, así mismo se indica que solo se debe responder por el daño causado, y conforme a la documentación allegada al proceso es claro que el señor Jorge Eliecer Barliza tenía antecedentes clínicos que pudieron ocasionar una agravación en su estado de salud, como lo es el tener obesidad y otras patologías considerables, así mismo el hecho que el también se desplazaba como conductor de un automotor que interviene en el insuceso.

1. **TASACIÓN EXCESIVA DE LOS EVENTUALES PERJUICIOS.**

Carga de la prueba:

Teniendo en cuenta la Teoría General de la Responsabilidad, la parte demandante es a quien corresponde demostrar el daño sufrido y la magnitud del mismo, que para el caso se concreta en perjuicios de carácter material y moral, cuya efectiva existencia deberá probar la parte actora, especialmente, lo concerniente a los perjuicios sufridos en la esfera personal de los miembros de su familia.

Consideraciones sobre los perjuicios reclamados:

Sobre los perjuicios patrimoniales hay que tener en cuenta las siguientes situaciones:

Respecto de lo que se entiende por perjuicios patrimoniales, según el artículo 1614 del Código Civil, se definen así: “Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento.” Al respecto manifiesto la suma presentada es desproporcionada y no se ajusta a la realidad de los perjuicios presuntamente sufridos.

Al respecto, manifiesto que la pretensión por concepto de daños materiales, pretensión que carece absolutamente de prueba, no se indica por parte del apoderado el fundamento y la razón de las pretensiones no se indica prueba siquiera sumaria de que se configuró una perdida que se presente y acredite como lucro cesante dejado de percibir, así mismo carece absueltamente de prueba idónea los ingresos que aparentemente percibía la parte actora, hecho que se comprueba con la respectiva declaración de renta y auto declaración al sistema de seguridad social.

Ahora bien, en cuanto a los perjuicios extrapatrimoniales, en primer lugar hay que precisar lo que se entiende por Daño Moral o *pretium doloris*, indicando que este perjuicio ha tenido una evolución más jurisprudencial y doctrinal que legal. Atendiendo al concepto dado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 18 de septiembre de 2008 M.P. William Namén Vargas, “Se identifica con la noción de daño moral, el que incide o se proyecta en la esfera afectiva o inferior de la persona, al generar sensaciones de aflicción, congoja, desilusión, tristeza, pesar, etc.” (Casación Civil 13 mayo 2008, SC-035-2008, Expte. 11001-3103-006-1997-09327-01).

Para el caso concreto es importante recordar el pronunciamiento de la Honorable Corte Suprema de Justica – Sala de Casación Civil respecto de la tasación de los perjuicios morales, dentro del expediente 11001-3103-035-1999-02191-01, M.P. William Namén Vargas, del 9 de julio de 2010:

“No obstante,“[s]uperadas algunas corrientes adversas y, admitida por esta Corte la reparación del daño moral **sin más restricciones para fijar su cuantía que las impuestas por la equidad (ex bono et aequo) conforme al marco concreto de circunstancias fácticas** (cas. civ. sentencias de 21 de julio de 1922, XXIX, 220; 22 de agosto de 1924, XXXI, 83), a partir de la sentencia de 27 de septiembre de 1974, es su criterio inalterado, la inaplicabilidad de las normas penales para su tasación, remitiéndose al arbitrium iudicis, naturalmente, ponderado, razonado y coherente según la singularidad, especificación, individuación y magnitud del impacto, por supuesto que las características del daño, su gravedad, incidencia en la persona, el grado de intensidad del golpe y dolor, la sensibilidad y capacidad de sufrir de cada sujeto, son variables y **el quantum debeatur se remite a la valoración del juez**”, estimando “apropiada la determinación de su cuantía en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador” (cas. civ. sentencia de 18 de septiembre de 2009, exp. 20001-3103-005-2005-00406-01).”

No obstante lo anterior se deberá atender las pretensiones por perjuicios inmateriales se deberán atender los criterios establecidos por las astas altas Cortes, especialmente lo indicado por el Consejo de Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo, SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de Unificación aprobada mediante Acta No. 23 del 25/septiembre/2013, en la que atendiendo la necesidad de establecer parámetros respecto a lo ateniente a los perjuicios de carácter extrapatrimonial estableció:

1. Respecto a los perjuicios de carácter Moral, cuando se trata de un lesionado, se fijaron topes máximos de indemnización los cuales deberán estar de acuerdo a la gravedad de la lesión misma a la que se le otorgaron porcentajes, al verificar la documentación allegada con la demanda no se certifica la existencia de una pérdida de capacidad laboral, hecho que debe ser analizado y tenido en cuenta por el despacho.

Por lo tanto el límite máximo a reconocer por concepto de daños morales seria el porcentaje mínimo es decir 10 salarios mínimos y en los niveles indicados a continuación:



Objeción al juramento estimatorio:

Conforme a lo establecido en el Artículo 206 de la Ley 1.564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, artículo que empezó a regir a partir del momento mismo de su promulgación, es decir, desde el 12 de julio de 2012 (Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012),en el que se establece: “*Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación*.

Ahora bien, en lo relativo al lucro cesante, por tratarse de un daño de carácter patrimonial, me permito objetar la liquidación presentada con fundamento en lo siguiente:

1. Respecto a lo referente al lucro cesante del señor Jorge Eliecer, es importante resaltar que no se allega por parte del apoderado demandante prueba que certifique de una forma idónea los ingresos percibidos, como lo es la declaración de renta o la auto declaración al sistema de seguridad social.

2. Así mismo la incapacidad que debe tenerse en cuenta es la certificada por medicina legal es decir 65 días.

3. Respecto al lucro cesante de la señora Emilia Zorro, esta pretensión carece de soporte probatorio, motivo por el cual no deberá tenerse en cuenta.

Mal hace la parte actora en hacer una multiplicación desconociendo las formulas establecidas por las altas cortes para el reconocimiento de esta pretensión.

Así las cosas, apelo al probo criterio del señor Juez para la estimación razonada y coherente de los perjuicios que se pretenden.

1. **CARGA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS**

De acuerdo a lo establecido en la legislación Colombiana deberá el asegurado demostrar la cuantía y ocurrencia del siniestro, siendo de vital importancia comprobar que para el caso, el conductor, el señor Juan Carlos Perdigón actuó de forma negligente, quien en su actividad de conducción debió en todo momento actuar de manera integral y conforme a toda la normativa, y los lineamientos establecidos para la conducción de vehículos automotores.

Es deber de los demandantes aportar de manera seria y fundada cuáles fueron los elementos reales que causaron de manera efectiva los perjuicios que reclaman, y es por esto que nuestra normativa indica lo siguiente:

*“ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.*

*Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”*

Señala el código de comercio:

*“ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.*

*El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.”*

Por lo tanto es importante resaltar que en esta instancia y al verificar los documentos allegados no se prueba que los perjuicios indicados por la parte actora fueron única y exclusivamente ocasionados como consecuencia del accidente de tránsito, como tampoco un eximente de responsabilidad en cabeza de la parte actora.

1. **AUSENCIA DE SOLIDARIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO CON LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.**

El artículo 1568 del código civil colombiano establece “DEFINICIÓN DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS. En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.

Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum.

La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley.” Resaltado fuera del texto

Teniendo en cuenta lo anterior al analizar el caso concreto, resulta claro que ni en una convención, ni en un testamento, ni en la ley, se estableció la solidaridad civil respecto de la empresa Tomadora de la póliza y La Equidad Seguros Generales O.C. figura que tampoco se pactó en dentro contrato de seguro celebrado por éstas. Por lo tanto a este Organismo cooperativo que represento no le es aplicable ningún tipo de solidaridad.

Por lo anterior en caso de una eventual sentencia en contra de los intereses de este La Equidad Seguros Generales O.C. solicito al despacho tener en cuenta lo establecido en el artículo 1079 del código de comercio que establece “El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”. Y de esta manera el valor a pagar no podrá ser superior al valor de la suma asegurada.

**EXCEPCIONES DEL CONTRATO DE SEGURO:**

1. SUJECIÓN AL CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO:

Es importante resaltar que en caso de que prosperen las pretensiones de la demandante contra mi representada las mismas deberán resolverse dentro de los parámetros establecidos en el contrato de seguro denominado RCE Servicio Público Nº AA034727 de Bogotá Calle 100, con vigencia desde el 01/05/2014 -24:00 horas hasta el 15/12/2014 – 24:00 horas Certificado Nº AA175333 Orden 329, en la cual se encuentran contenidas las condiciones particulares de la póliza y por las condiciones generales contenidas en la Forma 01062010-1501-P-03-0000000000000103, siempre y cuando se cumplan las condiciones necesarias establecidas en el contrato de seguros para su cobertura y no se trate de un hecho expresamente excluido por la misma,

La cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual está sujeta al cumplimiento de condiciones legales, entre las que cabe destacar las siguientes:

* El asegurado debe incurrir en una responsabilidad civil extracontractual de acuerdo a la legislación colombiana, causando como consecuencia de sus acciones u omisiones, lesión, muerte o daños a bienes de terceros, ocasionados a través del vehículo amparado.
* El siniestro así ocurrido debe estar previsto dentro de las coberturas pactadas por las partes, contenidas en los documentos contractuales.
* Es necesario analizar que no se presente ninguna causal de exclusión, es decir, ningún hecho que excluya la responsabilidad de la aseguradora, de acuerdo con los amparos y exclusiones que se pactaron en el momento de suscribir el contrato de seguro.
* Es de especial importancia verificar si los perjuicios a que eventualmente estaría condenado el asegurado están cubiertos o no en la póliza contratada.

En caso de un eventual fallo adverso, el mismo debe circunscribirse a lo pactado por las partes en el contrato de seguro, el cual soportaría la vinculación de mi representada en el presente proceso; no pudiéndose en consecuencia, proceder a una condena por fuera de los derroteros señalados y acordados por los contratantes, y mucho menos de forma solidaria, por cuanto prima en primer lugar las condiciones pactadas dentro del contrato de seguro suscrito.

1. LÍMITE DE VALOR ASEGURADO:

Se propone la excepción del límite del valor asegurado, teniendo en cuenta que en caso de una eventual condena, La Equidad Seguros Generales O.C., únicamente será responsable de acuerdo a los límites establecidos en la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° AA034727, de Bogotá Calle 100, a la luz de los amparos que fueron contratados y los límites del valor asegurado.

Señala el código de comercio:

*“ARTÍCULO 1079. El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del art. 1074.”*

Para este caso es importante aclarar que el valor asegurado para esta póliza para el amparo de lesiones o muerte a una personas es de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha del accidente, es decir que para la fecha del siniestro era la suma de $616.000, es decir la suma de treinta y seis millones novecientos sesenta mil pesos ($36.960.000.oo M/Cte.).

No obstante lo anterior las condiciones generales aplicables establecen en el numeral 3, lo siguiente:

 **3.** **Límite de responsabilidad de la aseguradora**

 La suma asegurada señalada en la carátula, limita la responsabilidad de La Equidad así:

(…)

* 1. El limite muerte o lesiones a una persona es el valor máximo asegurado destinado a indemnizar las lesiones o muerte a una sola persona.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, en el evento en que el señor Juez encuentre probados los hechos constitutivos de otras excepciones, sírvase declararlas probadas y reconocerlas oficiosamente en la sentencia a favor de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

1. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

En caso de que el eventual siniestro tuviese cobertura por el contrato de seguros celebrado, es importante dejar expresamente consignado que La Equidad Seguros Generales O.C. responderá siempre y cuando exista para la fecha del fallo condenatorio, disponibilidad del valor asegurado del amparo afectado de la póliza tomada.

1. LA GENÉRICA:

Solicito al Despacho, declarar aquellas excepciones que resulten probadas dentro del proceso, de conformidad con el principio *iura novit curia,* principio rector del ordenamiento jurídico continental.

**PRUEBAS:**

1. Interrogatorio de parte que le formularé al Demandante señor Jorge Eliecer Barliza Illidge, por medio de cuestionario verbal o escrito, que se presentará en la audiencia que para tal fin señale el despacho, previa citación de los absolventes, con el lleno de las formalidades previstas en el Art. 200 CGP.
2. Documental aportada: Condiciones particulares del SEGURO RCE Servicio Público Nº AA034727 de Bogotá Calle 100, con vigencia desde el 01/05/2014 -24:00 horas hasta el 15/12/2014 – 24:00 horas Certificado Nº AA175333 Orden 329.
3. Documental aportada: Condiciones generales del SEGURO RCE Servicio Público Nº AA034727 de Bogotá Calle 100, con vigencia desde el 01/05/2014 -24:00 horas hasta el 15/12/2014 – 24:00 horas Certificado Nº AA175333 Orden 329, en el cual se encuentran contenidas las condiciones particulares de la póliza y por las condiciones generales contenidas en la Forma 01062010-1501-P-03-0000000000000103.
4. Testimonial: Solicito al señor juez cite al señor Juan Carlos Perdigón, quien para la fecha de los hechos era el conductor del vehículo de placa WEQ789, quien podrá ser citado en la Calle 63 N° 9ª – 83 de Bogotá.

**ANEXOS**

## Documentos enunciados en el acápite de pruebas documentales.

**NOTIFICACIONES:**

1. La Equidad Seguros Generales O.C. recibe notificaciones en la Carrera 9 A N° 99-07 Piso 12 de la ciudad de Bogotá, D.C. correo electrónico servicio.cliente@laequidadseguros.coop
2. La suscrita apoderada en la Carrera 9 A N° 99-07 Piso 15 de la ciudad de Bogotá, D.C. viviana.cruz@laequidadseguros.coop

Del señor Juez,

**Viviana Carolina Cruz Bermúdez**

C.C. N° 1.014.217.313 de Bogotá

T.P. N° 252.434 del C.S. de la J.

SGC vccruz

1. PÉREZ VIVES, Álvaro. Teoría general de las obligaciones. Volumen II. Parte primera. Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá. 1968. p. 306. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sentencia del 14 de diciembre de 2012 M.P. A.S.R Corte Suprema de Justicia. Exp. 11001-31-03-028-2002-00188-01 M.P ARIEL SALAZAR RAMÍREZ [↑](#footnote-ref-2)